

## SESIONES ORDINARIAS

2026

## Supl. (1) al Orden del Día N° 7

SUMARIO: **Observaciones** formuladas al dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, contenido en el Orden del Día N° 7. **Del Caño y Bregman.** (1-D.O.-2026.)

Buenos Aires, 8 de abril de 2026.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Martín Menem.*

S/D.

Tenemos el agrado de dirigirmos a usted, conforme lo establece el artículo 113 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de formular observaciones al Orden del Día N° 7/2026 (expediente 72-S.-2025), dictamen emitido por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, por el cual el cual se modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La presente observación tiene el objetivo de dejar sentada nuestra posición de rechazo frente al tratamiento de la Orden del Día N° 7, mediante el cual se modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, ya que hemos sido excluidos de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del ambiente humano.

Queremos dejar en claro que estamos ante una regresión ambiental e inconstitucional por varias razones que aquí exponemos. En primer lugar, porque hay una violación del principio de no regresión, ya que la reforma representa un retroceso en los niveles de protección ambiental ya adquiridos, lo que contraviene el Acuerdo de Escazú (ley 27.566). En segundo lugar, porque hay también una violación a los presupuestos mínimos ambientales establecidos en la Ley General del Ambiente (ley 25.675) y en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, porque en el año 2019, la Corte Suprema de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, estableciendo que la protección de estos bienes colectivos no puede estar supeditada a intereses individuales o propietarios.

A esto hay que sumarle que el tratamiento en Diputados de este tema de suma importancia e impacto para toda la población de nuestro país fue sumamente antidemocrático e implica también una regresión democrática. Esto quedó evidenciado en la manera en que se realizó la Audiencia Pública de los días 25 y 26 de marzo del corriente año en la que se censuró la participación ciudadana, ya que solo se le permitió el uso de la palabra a menos de 200 personas de más de 100 mil personas inscriptas, y en la que la mayoría de los expositores se pronunció en contra de la modificación. Además, no se realizaron instancias plenarias informativas, no se convocó la participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales –IANIGLA–, autoridad técnica de la ley, ni los organismos responsables de la Ley de Cambio Climático, la Cancillería, o el Consejo Asesor Externo de la ley actual.

Tampoco se consultó a las decenas de expertos argentinos que participan en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático GIECC (IPCC), cuya evidencia sobre el estado de los glaciares es fundamental para esta discusión. Sobre este punto, queremos también denunciar la violación del Convenio 169 de OIT. La ley 24.071 obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas antes de tomar medidas legislativas que los afecten directamente, como esta reforma que impacta glaciares y periglaciares en sus territorios. Asimismo, la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia indígena y su participación en recursos, reforzado por el Acuerdo de Escazú.

Queremos destacar las modificaciones más perjudiciales según nuestro punto de vista.

1. – El debilitamiento de la Autoridad Técnica que es el IANIGLA. La reforma propone transferir la delimitación de áreas periglaciares a la “autoridad competente” definida por los gobiernos provinciales, restando autoridad a este organismo, que actúa sobre todo el territorio nacional. Este debilitamiento implica el desplazamiento de la autoridad nacional responsable del Inventario Nacional de Glaciares para poner

en ese lugar a funcionarios provinciales ligados a los intereses de las multinacionales mineras.

2. – También es sumamente grave la redefinición ambigua de “Glaciares” que se establece en este proyecto de ley que pretende proteger solo los cuerpos de hielo que cumplan con una “función hídrica efectiva y relevante”. Bajo este nuevo criterio, quedarían desprotegidos miles de cuerpos de hielo menores a una hectárea y manchones de nieve perennes, que son fundamentales para el sistema hídrico. Al permitir que cada provincia decida qué proteger, se ignora que los glaciares forman parte de cuencas interconectadas donde lo que sucede en la alta montaña impacta en la calidad y cantidad de agua de poblaciones río abajo, perdiendo así la mirada sistémica.

3. – Y por último queremos señalar el riesgo para la seguridad hídrica. Los glaciares almacenan el 70 % de las reservas de agua dulce del país y, en épocas de sequía, pueden aportar más del 40 % del caudal de los ríos cordilleranos. Con este proyecto se perderían reservas estratégicas. Hay que señalar que Argentina ha perdido el 42 % de su superficie glaciar en los últimos 30 años, por lo que reducir su protección agrava la vulnerabilidad ante el cambio climático.

Por estas razones, queremos dejar constancia de nuestro rechazo a este proyecto impulsado en favor de los intereses de los sectores extractivistas, que cuentan con los gobernadores y el gobierno nacional como garantes de este esquema de entrega de soberanía nacional y bienes comunes..

*Nicolás del Caño. – Myriam Bregman.*